

Las pymes crean un frente común contra el Gobierno por la reducción de jornada

Varias organizaciones muestran su malestar con Trabajo por no tener en cuenta sus particularidades

G. R. P.
Madrid

La reducción de la jornada laboral por ley que impulsa el Ministerio de Trabajo, y cuya mesa de negociación volverá a reunirse el lunes, tiene a las pequeñas y medianas empresas en pie de guerra. Alegan que al disponer de menos recursos técnicos y humanos, reducir el tiempo de trabajo de sus empleados —sin recorte de salario— supone un ataque a la supervivencia de la mayoría, y, en consecuencia, a más del 90% del tejido empresarial del país al que representan. Los reproches entre el Gobierno y las organizaciones que defienden al grueso de los empresarios han alcanzado un tono bronco, y que no acostumbran a emplear las pymes, tradicionalmente menos vol-

“No se podrán absorber los incrementos de costes”, indican

Los reproches han alcanzado un tono bronco, inusual en estas empresas

cánicas que sus hermanos mayores de la CEOE. A pesar de que la tensión entre las partes se ha rebajado tras los últimos encuentros, las posturas siguen enconadas, y nada hace presagiar que el acuerdo esté cerca de consumarse en septiembre, como pretende el Ministerio de Trabajo.

“Consideramos que esta medida es totalmente necesaria, pero insuficiente”, reconoce José María Torres, presidente de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes). “Si bien la reducción de la jornada laboral puede ser una propuesta vestida de buenas intenciones, las consecuencias nefastas que puede tener para las pymes, para nuestra economía y la generación de empleo, si se hace mal, pueden ser muy importantes”, añade.

A pesar de que esta asociación tiene una pésima relación con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), con Cepyme —integrada en su estructura—, y con Pimec, a cuenta de la representatividad que cada una de ellas se atribuye a sí misma, los argumentos que emplean todas ellas en contra de la reducción de la jornada han hecho que, por primera vez, vayan de la mano y en la misma dirección.

“Si bien muchos convenios vigentes establecen horarios equivalentes a 37,5 horas, y la media de horas trabajadas en España es de 37,8 horas mensuales, hay que tener en cuenta que estos acuerdos afectan mayoritariamente a grandes empresas y administraciones públicas, y que las pymes y las micropymes son las que tienen menos margen financiero y capacidad de invertir en contratación de nuevo personal”, detalla Torres. “Las pymes no podrán absorber los incrementos de costes que esta medida significa, a diferencia de las grandes empresas, y deberán repercutirlos sobre los precios aplicados a sus clientes. Esto supondrá una merma de competitividad que afectará a la lucha desigual entre pymes y grandes empresas, como venimos denunciado, por ejemplo, en los plazos de pagos, o en nuestra poca participación en la compra pública”, añade.

El líder de la CEOE, Antonio Garamendi, que equiparó el recorte que plantea Trabajo —de las 40 horas semanales actuales a 38,5 en 2024 y a 37,5 en 2025— con “regalar casi 12 días de vacaciones pagadas por la empresa al año”, también ha alertado de que “habrá muchos convenios que se paralicen” si se lleva a cabo este ajuste.

“Esto no debería plantearse como un enfrentamiento entre trabajadores y empresarios, porque no hay un problema actual en la sociedad en este sentido”, replica Antoni Cañete, presidente de Pimec, la patronal de pymes en Cataluña. “Se tienen que tener en cuenta los sectores y sus dimensiones. Se ha de legislar pensando en los pequeños para hacernos grandes, no en que cerremos negocios”, reclama Cañete. “Si mejoramos el absentismo, la productividad, la fiscalidad para las pequeñas y medianas empresas... No hay ningún problema en que podamos hablar de en qué condiciones se pueden tener las jornadas laborales e incluso salariales”, remacha.



El ministro de Economía, Bruno Le Maire, el 7 de febrero en el Senado, en París. DANIEL PIER (GETTY)

Francia no controla su déficit pese a las advertencias de Bruselas

El exministro de Economía alerta de que podría alcanzar el 6,2% en 2025

DANIEL VERDÚ
París

Francia espera en vilo desde hace ocho semanas el nombramiento de un nuevo primer ministro. Una vez se conozca el nombre del nuevo inquilino de Matignon, sin embargo, el elegido no tendrá ni un minuto de tregua. Incluso antes de pensar en el presupuesto del Estado para 2025, que debería estar diseñado a mediados de septiembre y luego debatido por el Parlamento a partir del 1 de octubre, el nuevo ejecutivo se enfrentará a un desajuste imprevisto en las finanzas públicas. El déficit público francés, que en 2023 subió hasta el 5,5% del PIB —lo que llevó a la Comisión Europea a abrir un expediente por déficit excesivo— corre ahora el riesgo de agravarse hasta el 5,6% este año e incluso hasta el 6,2% en 2025 si no se toman medidas urgentes.

La alarma la transmitieron el lunes Bruno Le Maire, ministro dimisionario de Economía, y Thomas Cazenave, su ministro delegado de Cuentas Públicas, a los parlamentarios miembros de la comisión de finanzas en la Asamblea Nacional y el Senado. “Hay un serio desajuste de las finanzas públicas”, reconocían en una nota del ministerio de Economía. Según Le Maire, que niega ninguna responsabilidad en

la cuestión, no hay otra solución ahora que actuar rápidamente con medidas contundentes como recortar 16.000 millones en el presupuesto del año en curso.

Le Maire se había marcado el objetivo de disminuir el déficit este año al 5,1%, pero los documentos que han hecho llegar a los parlamentarios apuntan a una evolución inversa. La causa, aseguran, es que los ingresos fiscales son peores de lo esperado en lo que respecta al IVA, al impuesto sobre la renta o al impuesto de sociedades. El crecimiento de Francia, sin embargo, debería estar conforme a las expectativas, cercano al 1% o 1,1% en 2024. Pero este aumento del vigor de la economía, impulsado en parte por el comercio exterior, resulta “menos favorable para los ingresos fiscales” de lo previsto, señalan.

Los responsables del ministerio comunicaron que habían descubierto recientemente una situación alarmante en el ámbito de los municipios, departamentos y otras colectividades locales. Sus gastos se han disparado de manera inesperada desde principios de año, mucho más rápido que sus ingresos. Y de, ahí preci-

La Comisión Europea ya abrió un expediente a París por el desajuste

Le Marie propone recortar 16.000 millones en el presupuesto de 2024

samente, surgen eso 16.000 millones de euros que señala Le Maire.

Eric Coquerel, presidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y diputado de La Francia Insumisa (LFI, el partido de Jean-Luc Mélenchon), se quejó ayer de que detrás de ese mensaje la intención de Le Maire y Cazenave es imponer al próximo Ejecutivo más recortes en el gasto público, que a su parecer están en el origen del problema.

Ante esta anunciada desviación de las cuentas públicas, que corre el riesgo de debilitar más la credibilidad presupuestaria de Francia, Bruno Le Maire asegura que ha hecho todo lo posible. Primero, congelando por decreto, a principios de año, 10.000 millones de euros en gastos. Luego, proponiendo una ley de finanzas rectificativa para ahorrar otros 10 mil millones de euros. Pero este texto no se concretó, por falta de apoyo político. “No se ha podido realmente hacer nada ni para mejorar los ingresos fiscales, ni para cancelar créditos, ni en relación con las colectividades locales”, admiten en Bercy.

El Tribunal de Cuentas francés alertó en julio del “inquietante” nivel de la deuda pública nacional, que se sitúa en el 110% del producto interior bruto (PIB), tras un aumento del déficit superior al previsto en 2023. Además, el organismo señalaba que el camino marcado por el Gobierno dimisionario para enderezar la situación presupuestaria y tratar de revertir el aumento de la deuda hasta 2027 se basaba en objetivos “poco realistas”, debido a previsiones de crecimiento “demasiado optimistas”.